

C Columna

La educación pública no solo enfrenta una crisis estructural



Por Juan Pablo Catalán,
profesor e investigador de la
Facultad de Educación de la
Universidad Andrés Bello

En su última Cuenta Pública, el presidente Gabriel Boric afirmó que al final de su mandato los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) estarán más sólidos que al inicio. Como respaldo, citó mejoras en los resultados del SIMCE. ¿Pero cómo explicar estos supuestos avances si, al mismo tiempo, proliferan escuelas sin clases, docentes ausentes por licencias prolongadas, baños clausurados, infraestructura deficiente y comunidades completamente desinformadas?

No es exageración, es Chile en 2025. Es Atacama, Colchagua y Andalién Sur. Es el rostro visible de un sistema que se desploma mientras desde La Moneda se insinúa éxito. Porque si los estudiantes realmente están aprendiendo más, ¿Por qué los propios equipos docentes denuncian que no tienen recursos ni condiciones para enseñar? ¿Por qué tantas escuelas públicas están hoy al borde del colapso operativo?

Según el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública (2023), los SLEP carecen de planificación territorial, operan con baja participación de las comunidades y evidencian graves debilida-



des en su gestión. La Dirección de Presupuestos, Dipres, en 2024 agrega otro dato clave: más del 70 % del presupuesto se destina a gasto corriente, dejando en segundo plano la inversión en calidad pedagógica, acompañamiento docente o desarrollo de capacidades locales.

Hoy, la educación pública no solo enfrenta una crisis estructural, sino una crisis de sentido. ¿Para qué existe este sistema, si no es capaz de asegurar aprendizajes significativos y sostenibles en los estudiantes más vulnerables del país? ¿Quién responde por cada niño que egresa sin comprender lo que lee, sin desarrollar pensamiento crítico, sin saber cómo desenvolverse en la sociedad?

No se trata de perfeccionar un modelo fallido. Se trata

de cambiarlo en serio. La evidencia comparada en América Latina –como el Plan Ceibal en Uruguay o las redes educativas autónomas en Colombia– demuestran que cuando se entrega poder real a los territorios, cuando las escuelas pueden decidir y adaptarse, los aprendizajes mejoran. No por decreto, sino porque hay eficiente gestión y claro propósito.

Chile necesita avanzar hacia un modelo de educación pública con autonomía pedagógica y administrativa, con financiamiento basal robusto y con comunidades escolares empoderadas. Un modelo donde la mejora no se mida por el SIMCE, sino por cuánto aprenden y se desarrollan los estudiantes.

Lo que hoy tenemos no resiste más. Los SLEP, tal como están, son estructuras que administran el deterioro con lenguaje técnico. La burocracia ha reemplazado la vocación y en esa trampa, los estudiantes son los que siguen perdiendo.

La pregunta clave es: ¿Quién se hace responsable? Si nadie lo hace, entonces esta no es una crisis: es un abandono; uno que amenaza con volverse irreversible.